

CRÓNICA POLÍTICA DE RUANDA, 2010 – 2011*

por Filip Reyntjens
(traducción del francés: Ramón Arozarena)

1. INTRODUCCIÓN

Tres han sido los episodios importantes que han marcado el periodo cubierto por esta crónica: las elecciones presidenciales de agosto de 2010, la emergencia de graves tensiones en el seno del FPR y la publicación del « Informe Mapping » de la ONU sobre las violaciones de derechos humanos en el Congo. Vamos a abordar sobre todo estos tres temas y al mismo tiempo, de manera breve, hablaremos de la evolución en el terreno de la gobernanza y de la justicia.

2. LAS « ELECCIONES » PRESIDENCIALES DE AGOSTO DE 2010

La oposición bloqueada

Evocábamos el año pasado los múltiples obstáculos que el FPR ponía en el camino de una emergente oposición. Resumamos estas constataciones y retomemos el hilo por donde nuestra crónica anterior se detuvo. Cuando la oposición política parecía haber desaparecidos en 2003, vuelve a la superficie en 2009-2010 en la perspectiva del escrutinio presidencial de agosto de 2010. Tras numerosas dificultades, solo un partido de oposición, el Partido Social (PS-Imberakuri) logra inscribirse a mediados de 2009, mientras otros partidos, el Partido Democrático verde (DGP) y las Fuerzas democráticas unificadas (FDU-Inkingi) son excluidos del registro de partidos por medio de sabotajes sistemáticos. Ello no impide que estas iniciativas pongan en cuestión el monopolio del FPR e introduzcan en el interior del país un debate que se enfrenta al discurso del partido en el poder. Estas actividades, cuando el FPR controla el espacio político desde el nivel local hasta el nacional, son percibidas como una real amenaza, tanto más cuanto se desarrollan en un momento en que el régimen está confrontado a tensiones internas. Los dirigentes de los partidos de oposición son amenazados, el poder organiza escisiones en el seno de estos partidos, sus reuniones son perturbadas, diversos obstáculos administrativos les impiden funcionar...

El 4 de marzo de 2010, Déo Mushayidi, tutsi, antiguo periodista y presidente del Partido de defensa del pueblo (PDP-Imanzi) en exilio, que está en la región para prepara el registro de su partido en Ruanda, es detenido en Tanzania y extraditado, vía Burundi, a Ruanda el 5 de marzo. Mushayidi es acusado de « terrorismo », « atentado a la seguridad del Estado » y “revisiónismo, ideología del genocidio y divisionismo”. Habría colaborado con

las FDLR y formaría parte de una red terrorista concretamente con Kayumba Nyamwasa y Karegeya (cf. infra). Será condenado a cadena perpetua el 17 de septiembre de 2010.

La represión se intensifica en abril de 2010 cuando la presidenta de las FDU-Inkingi, Victoire Ingabire, que había regresado a Ruanda tras 16 años de exilio, es detenida y acusada de “ideología genocida”. Es liberada bajo condiciones, se le impide abandonar Kigali; su abogado americano, Peter Erlinder es detenido a su vez en junio, aunque es liberado por razones médicas tres semanas después; el fiscal general anuncia no obstante que sigue inculpado y que será perseguido judicialmente. Dos de los tres periódicos independientes que quedan, *Umuseso* y *Umuvugizi*, son suspendidos por seis meses por el Consejo Superior de los medios de comunicación y de este modo se impide que puedan cubrir la campaña electoral y las elecciones. El 24 de abril, la investigadora sobre Ruanda de *Human Rights Watch* es expulsada. El mismo día, el director de *Umuvugizi*, Jean-Bosco Gasasira, huye del país tras haber recibido repetidas amenazas de muerte; le sigue en la huida su colega de *Umuseso* Didas Gasana, el 24 de mayo.

A finals de junio, el codirector de *Umuvugizi*, Jean-Léonard Rugabage, es asesinado en Kigali el mismo día en que el periódico publica en su web (cuyo acceso es bloqueado para Ruanda) un reportaje sobre la tentativa de asesinato de un opositor en Sudáfrica. El gobierno pretende que Rugabage ha sido víctima de un acto de venganza, pero su colega Gasasira afirma que “los servicios secretos ruandeses están metidos de lleno en una campaña de asesinatos”. Dos hombres detenidos al día siguiente del asesinato, uno de los cuales admite haber cometido el crimen a petición de un miembro de una familia algunos de cuyos miembros habrían sido asesinados en 1994 por Rugabage, son condenados a cadena perpetua a finales de noviembre de 2010, en un procedimiento judicial nada convincente. El vicepresidente del DGP, André Rwisereka, es asesinado el 13 de julio; su cuerpo, cuya cabeza fue prácticamente cortada, es descubierto cerca de Butare. Mientras la policía sugiere que ha sido víctima de un ataque a mano armada, el presidente del partido afirma que él mismo y el vicepresidente asesinado han recibido amenazas de muerte. El 15 de julio, el Consejo consultivo permanente de los partidos de la oposición (CCP) exige una investigación internacional; este llamamiento es retomado al día siguiente por el secretario general de la ONU, que pide una “investigación completa” sobre los asesinatos de Rugabage y Rwisereka. Un par de días después del asesinato es aprehendido un sospechoso, pero será liberado unos días después y ya nunca más se oirá algo sobre este asunto. El 14 de octubre, la familia de Rwisereka publica una declaración en la que afirma “saber que él fue asesinado por razones políticas (...) Sí, nosotros acusamos a ciertos individuos en el seno del gobierno (...) Hasta el presente, el gobierno de Ruanda se ha mostrado de manera sospechosa y deshonesto y algunos de sus comentarios sobre la muerte de nuestro padre son desconcertantes”. Hubo igualmente tentativas de asesinato de opositores en

Kampala y Johannesburgo, lo que hace temer que el régimen ha lanzado una campaña de eliminación de opositores.

En julio, son detenidos tres periodistas de un tercer periódico, *Umurabyo*, acusados de “insurrección, publicación de material insultante para con el presidente, incitación al desorden público, divisionismo étnico y promoción de la ideología del genocidio”. El 28 de julio, toda la tirada realizada en Kampala por periodistas de *Umuseso* del primer número del periódico *The Newslime* es embargada en la frontera ruando-ugandesa. El mismo día, el Consejo Superior de los Media publica una lista de los medios de comunicación autorizados a operar en el país. En ella no aparece ninguno de los periódicos críticos, lo que significa que, simplemente, están ya no suspendidos sino prohibidos. Mientras tanto, decenas de miembros de los partidos de oposición son detenidos el 24 de junio, cuando se manifestaban en signo de protesta contra la imposibilidad de que sus dirigentes puedan registrarse como candidatos. El presidente del PS Imberakuri, Bernard Ntaganda, es arrestado e imputado por “divisionismo étnico, organización de una manifestación no autorizada, constitución de un grupo criminal y tentativa de asesinato”.

El régimen, en consecuencia, no quiere arriesgarse para nada; todas las veleidades de contestación son reprimidas eficazmente y el paisaje político queda completamente cerrado a cal y canto en el periodo que conduce al escrutinio. En este entorno constreñido, el candidato Kagame drena muchedumbres impresionantes hacia sus mitines. Paradójicamente, es en Gicumbi (Byumba, donde el FPR masacró miles y miles de hutu en 1994, donde una monumental asistencia de 150.000 civiles hutu se da cita; pero estas masas no deben engañarnos: “Las gentes son obligadas a asistir, las llevan en camiones del Estado. (...) Deberán mostrar cuando regresen a la aldea el sello de que han votado”. En Kigali, las personas “invitadas” por SMS a acudir al mitin del partido son transportadas por decenas en los autobuses de la compañía de transporte del Estado. Los funcionarios se ven obligados a entregar “benévolamente” el tercio de su salario como contribución a la financiación de la campaña. Siempre en Kigali, “los barrios han sido literalmente bloqueados durante horas por el ejército la última semana: quien se encontrara en el perímetro se veía impedido para salir y era fuertemente incitado a que acudiera al mitin presidencial”. Durante la campaña, la web del periódico “independiente” (pero, como se sabe, voz de la presidencia) *The New Times* publicita: « *Vote Kagame Paul. He will never let you down. He delivers* », con un link www.paulkagame.com (« The pillar of unity, democracy and development »).

El escrutinio

Una vez que los candidatos de la oposición están imposibilitados para participar, La Comisión electoral nacional anuncia el 7 de julio que hay 4 candidatos que se han registrado. Al lado del presidente Kagame hay tres que

representan a partidos de la órbita del FPR. Estos candidatos fantoches no son opositores y saben que sus posibilidades frente a Kagame son nulas. Se trata de una práctica ya vieja del sistema: proponer candidatos que sólo se presentan para la galería, que no ganarán de ningún modo frente al candidato oficial; este tipo de candidatos son conocidos en Ruanda con el nombre “de señoritas de compañía”. Es una artimaña utilizada también en el seno del FPR. Por ejemplo, en diciembre de 2009, Kagame es reelegido presidente del partido en una votación en la que el único oponente obtuvo el 2% de los votos. En las “primarias” organizadas en las provincias para la designación del candidato del FPR a la presidencia, Kagame obtiene en cada ocasión entre el 98% y el 100% de los votos contra candidatos que le son cercanos. Por ejemplo, en Kigali-ciudad, el “competidor” José Kagabo tuvo 6 votos de 380, pero se mostró “satisfecho” del resultado y afirmó haber perdido de “manera transparente”.

A pesar de las protestas de organizaciones internacionales de derechos humanos, a pesar incluso de algunas expresiones de inquietud por parte de Washington, el escrutinio tiene lugar el 9 de agosto, con un resultado conocido de antemano. Kagame obtiene el 93,08% de los votos, frente al 5,15%, 1,37% y 0,40% de sus “competidores”. La participación de los votantes es del 98,06% del censo. Los ruandeses saben perfectamente lo que se espera de ellos y conocen los riesgos de un comportamiento “incívico”. Los resultados son notablemente idénticos en las cinco provincias (los resultados por distritos no son publicados por la comisión electoral): el resultado de Kagame oscila entre el 92,53% y el 93,99%, una variación de menos del 1,5%. Pasa lo mismo con los resultados de los “competidores”: Ntawukuriryayo del 4,31 al 6,07%, Higiro del 1,12 al 1,73% y Mukabaramba del 0,25 al 0,74%; hay pues una fuerte unanimidad en el conjunto del país.

Aun cuando la oposición está excluida y el FPR controla todo el aparato electoral (desde la comisión electoral nacional a la de los distritos en el ámbito local), lo mismo que sucedió en 2003, el partido en el poder no está plenamente cómodo. Recurre en consecuencia a un fraude masivo en estos dos niveles. Están por un lado los eslóganes unanimitas de los tiempos de Habyarimana (“Tuli kumwe 100%” – “Todos juntos 100%”) que vuelven a aparecer (“Tora Kagame 100%” – “Votad Kagame 100%”), lo cual incita a los responsables locales a obligar a la población no solo a que vaya a votar sino igualmente a que vote por el candidato Kagame. Incluso se conceden premios a “los mejores sectores”. La lógica de los “contratos de performance” (*imihigo*) impuestos a los poderes locales en numerosos terrenos se traduce igualmente en lo relativo a los éxitos electorales. Se han conocido varios casos en que durante las horas previas a la votación los responsables locales fueron de puerta a puerta para retirar los carnés de elector y rellenaron la papeleta de voto a favor de Kagame, sellaron el carné e informaron a los electores de que ya habían votado y ya no debían acudir a la mesa electoral a votar. El coordinador de una mesa de Musanze confirma estas prácticas y añade que “las autoridades nos dijeron que controláramos cada papeleta (...) Si la papeleta no era favorable a Kagame nosotros la remplazábamos por otra”. Según su testimonio,

los 15 ó 20 votos que Higiro recibió en su sector, fueron sustituidos por papeletas a favor de Kagame. Recordemos que los electores se expresan en Ruanda poniendo en la papeleta su huella digital al lado del candidato elegido. En un país en el que los iletrados utilizan así sus huellas como firma, significa que firman la papeleta con su nombre. Aunque sería imposible que las autoridades identificaran al propietario de las huellas, la percepción de numerosos electores es que el voto no es secreto.

Por otra parte, las prácticas fraudulentas no se limitan al ámbito local. A falta de una observación electoral de la UE, el único informe internacional serio es el de la Commonwealth, a la que Ruanda se adhirió en noviembre de 2009. Aunque la misión acepta demasiado fácilmente el discurso del poder en cierto número de puntos (por ejemplo, sobre la composición ‘imparcial’ de la comisión electoral nacional y las razones por las que se rechazó la inscripción de los partidos de la oposición), anota defectos esenciales: ausencia de verificación de hecho de que las urnas están vacías al inicio (lo que permite el relleno de ellas, como se ha señalado anteriormente), la utilización de huellas digitales, lo que podría crear la percepción de que el voto no es secreto y, sobre todo, la falta de transparencia de los procedimientos de consolidación. El informe se muestra preocupado igualmente por “la ausencia de voces críticas de la oposición”. En lo concerniente al punto crucial del recuento, la misión señala que “ha sido imposible establecer dónde, cómo y cuándo se ha realizado la consolidación”, tanto entre las mesas electorales y los distritos como entre éstos últimos y el nivel nacional. Nadie sabe efectivamente lo que ha pasado con las papeletas y recuentos entre el 9 de agosto, día de las elecciones, y el 11 de agosto, día de la proclamación del resultado. Según una fuente bien situada, que se abrió a una periodista neerlandesa presente en el escrutinio, el resultado habría sido tan monolítico que, lo mismo que en 2008, la comisión electoral lo habría revisado a la baja. Ello ayuda sin duda a explicar la naturaleza uniforme de los resultados a través del país. Numerosos testigos preguntados en el marco de una reciente investigación para un doctorado confirman que para muchos ruandeses las elecciones no son legítimas.

La Unión Europea, a la vez que observa que “todavía debe hacerse cierto progreso en el terreno de los derechos fundamentales”, felicita a Ruanda y considera las elecciones como “una nueva etapa en el progreso y desarrollo democráticos” del país. Los EEUU, sin embargo un sólido aliado del régimen ruandés, son menos hipócritas. La Casa Blanca expresa su preocupación respecto a “acontecimientos molestos” que dice haber comunicado al gobierno ruandés con la esperanza de que “los dirigentes darán pasos hacia una gobernanza más democrática y un creciente respeto de las opiniones minoritarias y de la oposición”. Indicación chocante de la inquietud americana es que la declaración no felicita a Kagame por su reelección

El destino de la oposición

La reelección de Kagame no significa por ello el fin de los problemas de la oposición. Victoire Ingabire es detenida de nuevo el 14 de octubre de 2010, tras mantener su casa rodeada durante varios días. Desde entonces está en la cárcel central de Kigali y acusada, además de cuanto se le reprochó en su primera detención en abril, de inteligencia con las FDLR para poner en pie una nueva oposición armada, la Coalición de las Fuerzas de Defensa (CFD), presentada como la rama militar de las FDU-Inkingi pero de la que nadie ha oído hablar. Un ‘tránsfuga’ de las FDLR, Vital Uwumuremyi, fue muy oportunamente detenido la víspera en la frontera ruando-congoleña y habría “confesado” haber estado implicado con Ingabire en la compra de armas para la CFD. Sin embargo, Uwumuremyi ya se entregó a Ruanda a primeros de 2009 y, según las FDU-Inkingi, ha trabajado como agente en contacto regular con los servicios de seguridad. Otros oficiales exFDLR que implican a Ingabire abandonaron la organización antes de los presuntos contactos con ella.

Ingabire, en su comparecencia ante el tribunal de Gasabo el 25 de octubre, se declara inocente, mientras que Uwumuremyi confiesa todo; Ingabire lo conoce bajo el nombre Gaspard Kalimba, el hombre que firmó el arriendo de la casa que ella ocupa. En la misma comparecencia, aparece que el testimonio de Uwumuremyi está fechado anteriormente y que los documentos “encontrados” encima de él son falsos. La cosa toma un giro todavía más extraño cuando el 3 de noviembre la policía ocupa de nuevo la residencia de Ingabire, donde descubre “un bunker” que, según la fiscalía, sería “de naturaleza militar”. En realidad se trata de una fosa para evacuar aguas, cavada por sugerencia de Uwumuremyi, alias Kalimba, por el factotum Absolom Nvyekure. Adivínese quién posteriormente alertó a la policía sobre la existencia del “bunker”. Efectivamente, Absolom Nvyekure. El presidente Kagame, que ya había afirmado antes que el lugar adecuado de Ingabire era la cárcel, la acusa públicamente, concretamente en unas entrevistas. Estas declaraciones nada respetuosas con la separación de poderes, evidentemente, no son de naturaleza para garantizar la independencia de la justicia. Además de sus conflictos con la justicia, Ingabire se enfrenta en los inicios de 2011 a tensiones en el seno de las FDU-Inkingi, al menos entre las que operan en el exterior; tensiones causadas tanto por conflictos personales como por la colaboración con el Rwanda Nacional Congreso (cfr. infra).

Entre tanto, las cosas no evolucionan mejor para el resto de partidos de oposición. En junio de 2010, el presidente del DGP, Frank Habineza, es acusado por el ministerio de Administración Local de malversación de fondos destinados a ONGs, algunas de las cuales son calificadas de ilegales, y de utilización de estas ONGs para “empañar la imagen del país”. Confrontado a constantes presiones para que se desolidarice de los otros dos partidos del CCP, el DGP abandona la plataforma el 15 de junio de 2010, pero vuelve a unirse a ella el día siguiente, para abandonarla de nuevo el 28 de diciembre. Ello no impedirá que el periódico Rushyashya en su edición del 8 al 20 de febrero de 2011 acuse al DGP de estar implicado en la movilización de un grupo rebelde para atacar Ruanda. En su edición del 20 al 30 de enero, este periódico ya había

situado al DGP en el campo de los oficiales superiores que habían pasado a la oposición (cf. infra). Estas acusaciones, a la luz de la suerte reservada a otros líderes de la oposición, constituyen evidentemente una serie advertencia a Habineza.

Ya hemos visto que el presidente del PS-Imberakuri, Bernard Ntaganda, fue detenido el 24 de junio de 2010 con varios dirigentes del partido. Las tentativas del FPR de provocar escisiones en el seno del PS-Imberakuri prosiguen tras las elecciones presidenciales. Así es como un ala que el partido llama PS “Power” (referencia a las alas radicales de algunos partidos antes del genocidio de 1994) colabora con el “Foro de partidos políticos” dominado por el FPR para organizar “sesiones de perfeccionamiento sobre la cultura patriótica y el entorno”. En la misma línea, personas que trabajan por el FPR pero que se presentan como miembros del partido participan en emisiones de radio y televisión oficiales. Las detenciones, los despidos e intimidaciones, incluso “desapariciones” de militantes del partido persisten. El 11 de febrero de 2011, Ntaganda es condenado a cuatro años de prisión por “divisionismo” y atentado a la seguridad del Estado. Amnistía Internacional estima que esta sentencia “criminaliza de nuevo la disidencia política”, posición que comparte Human Rights Wach: “Se trata evidentemente de procesos políticos. Bernard Ntaganda, sus colegas y los dos periodistas, así como otros hombres y mujeres de Ruanda, pagan el alto precio por haber osado expresar sus opiniones”.

No tengo en mis manos la sentencia en el asunto Ntaganda, pero sí el acta de acusación (que el tribunal ha seguido) y es revelador de la criminalización de las opiniones políticas. Se reprocha a Ntaganda haber incitado a la población a rebelarse contra el Estado por medio de discursos en los que critica concretamente la imposición del inglés y denuncia la acción de grupos extremistas en los procedimientos judiciales gacaca, o afirma que la ideología del genocidio es utilizada por el gobierno para amordazar toda crítica. Igualmente, le es reprochado haber afirmado que “las autoridades están más interesadas en su propio bienestar que en el de la población”. Con relación a la acusación de divisionismo, Ntaganda “difunde la mentira de que el gobierno no representa a todo el pueblo, lo cual puede causar agitación entre la población”. Todo esto no es más que demostración de la libertad de expresión de un miembro de la oposición y, en consecuencia, es la crítica al gobierno lo que se erige en infracción.

DIVISIONES EN EL SENO DEL FPR

Varias divisiones en el seno del FPR, sobre todo en su base histórica y física, el ejército, hacen aparición durante el periodo preelectoral. El 26 de febrero, el antiguo jefe de estado-mayor, general Kayumba Nyamwasa, temeroso de ser detenido, huye del país y encuentra asilo en Sudáfrica. Declara ante la prensa internacional que el régimen evoluciona hacia una “dictadura total” y denuncia que Kagame es un corrupto. Las reacciones de Kigali son

furibundas. El ombudsman, Tito Rutaremara, califica a Kayumba Nyamwasa de “maestro de la intriga” y a sus palabras de « *outrageous, malicious and dishonest* »: el general es « *a self-important, egocentric individual, bent on satisfying his insatiable personal interests* ». Se trata de acusaciones graves y es igualmente sospechoso de “crear su propia base en el seno del ejército”. El régimen establece inmediatamente un dossier judicial contra Kayumba Nyamwasa y contra el coronel Karegeya (que huyó a Sudáfrica ya en 2007), acusados de estar implicados en atentados con granadas cometidos en meses pasados. Otra acusación, que posteriormente será explotada más, es rápidamente lanzada: una delegación de las FDLR habría visitado Kayumba, con lo que se sugiere que éste está en connivencia con aquellas. Karegeya se une al lío afirmando que Kagame debe ser derrocado: « *A dictator can never step down, they are brought down* ». Afirma igualmente que el régimen ruandés ha cometido numerosos asesinatos políticos; acusación que repite el 4 de agosto en una entrevista a la BBC.

El 19 de junio, Kayumba es herido gravemente por disparos en Johannesburgo. En una reacción hipócrita, la ministra de Asuntos Exteriores, Louise Mushikiwabo, se dice “chocada” por la noticia: « *The Government of Rwanda does not condone violence, and we wish the family strength and serenity* ». Unos días más tarde, los autores del atentado intentan terminar con la vida de Kayumba, que está hospitalizado. El 1 de julio, son detenidos unos sospechosos y las autoridades surafricanas, sin citar expresamente a Ruanda, afirman que “agentes secretos” de un país “con el que tenemos buenas relaciones diplomáticas” están implicados en la tentativa de asesinato. Inmediatamente el embajador de Suráfrica es convocado por la ministra Mushikiwabo, que le transmite el descontento del gobierno ruandés en cuanto a la manera “muy poco profesional” como se habían llevado las investigaciones. El portavoz habitual de Kagame acusa a las autoridades surafricanas de “manipulaciones” y de “engañar a la opinión” a fin de implicar a Ruanda. A principios de agosto, Pretoria llama a su embajador “a consultas », lo que es una señal inequívoca del descontento surafricano con relación a la manera con que Kigali gestiona el dossier. Desde entonces, el embajador no ha vuelto a su puesto y probablemente habrá que esperar a que se realice el proceso, que debe iniciarse en julio de 2011, sobre la tentativa de asesinato de Kayumba Nyamwasa para que las relaciones bilaterales se clarifiquen.

En el mismo periodo, varias personas próximas al general rebelde congoleño Laurent Nkunda, que desde comienzos de 2009 está en Ruanda en residencia vigilada, son asesinadas, cuando, como veremos más tarde, parece que se está poniendo en pie una alianza entre Kayumba y los suyos y los hombres de Nkunda. A comienzos de octubre, el director y redactor-jefe del periódico controlado por la presidencia, *The New Times*, y también antiguo portavoz del gobierno, Joseph Bideri, huye del país a Canadá. Mientras es acusado de mala gestión, evasión fiscal, fraude y blanqueo de dinero, el hecho es que su marcha está ligada con las tensiones en el seno del régimen e incluso en la presidencia. Siguen los problemas en el interior del ejército. El 19 de

abril, los generales Karenzi Karake y Muhire son arrestados, el 22 lo es el coronel Dodo y el 10 de junio el general Kazura. Circulan rumores de golpe de Estado, algo que contribuye al nerviosismo del régimen. Un escolta de Kagame, que toma el camino del exilio, declara que “el presidente ya no confía en nadie”.

Especialmente desde el año 2000, el número de tutsi, incluyendo eminentes miembros del FPR, que han abandonado el país ha aumentado constantemente. Oficiales superiores, diplomáticos, magistrados, periodistas y cuadros de la sociedad civil huyen de una situación que califican de dictadura. Algunos adoptan un perfil bajo, mientras que otros se unen a los movimientos de oposición en exilio. En agosto de 2010, cuatro antiguos altos dirigentes del FPR publican un documento de 67 páginas titulado *Rwanda Briefing*. Los autores no son cualquier cosa. El general Kayumba Nyamwasa es el antiguo jefe de estado-mayor, antiguo jefe de *Nacional Security Service*, uno de los múltiples organismos de información y antiguo embajador en la India. El coronel Patrick Karegeya es el antiguo jefe de *External Security Organisation*. El Doctor Théogène Rudasingwa ha sido secretario general del FPR, embajador en USA y jefe del gabinete del presidente Kagame. Gérald Gahima es antiguo fiscal general del Estado y vicepresidente de la Corte Suprema. Su documento es una larga diatriba contra el régimen, acusado de haber instalado una dictadura totalitaria basada en el terror, de ser culpable de graves violaciones de los derechos humanos, de corrupción y de nepotismo, de haber cometido numerosos asesinatos políticos, y – acusación relevante por provenir de tutsi – de haber marginado y excluido a los hutu. Kagame es personalmente y fuertemente criticado y los autores intentan deconstruir los mitos creados entorno a su persona. El documento termina con unas recomendaciones, en concreto con la de poner en pie un gobierno de unión nacional que debe conducir Ruanda hacia una nueva transición.

En cuanto aparece *Rwanda Briefing*, el hermano de Kayumba Nyamwasa, el teniente coronel Rugigana Ngabo, es detenido el 22 de agosto, pero el portavoz de las FRD pretende que este hecho nada tiene que ver con las actividades de su hermano. Cuando comparece ante el consejo de guerra a finales de enero de 2011, el fiscal afirma no obstante que los hechos imputados ligan a Rugigana con Kayumba Nyamwasa y con “la empresa criminal” de este último y de sus tres “cómplices, condenados dos semanas antes (cf. *infra*). A primeros de diciembre, la esposa e hijos de Ruigana huyen del país y piden asilo en Uganda. En enero de 2011, el padre de Kayumba Nyamwasa, de 85 años de edad, es detenido en la frontera ruando-ugandesa; su pasaporte es confiscado. Otras personas sospechosas de mantener lazos de unión con Kayumba Nyamwasa son también objeto de vigilancia. El 20 de agosto de 2010, Eméritha Munkunda, antiguo cuadro del FPR (y también cercana a Nkunda, cf. *supra*), es asesinada tras ser acusada por el secretario general del FPR de supuesta ligazón con Kayumba Nyamwasa. Se desencadena inmediatamente una campaña contra los otros autores del informe, acusados de crímenes y malversación de fondos cuando ocupaban puestos oficiales.

Probablemente, algunas de estas acusaciones no son infundadas, pero es interesante poner de relieve que no son formuladas más que tras el paso de estas personas a la disidencia. En un artículo especialmente vulgar y de mala intención del profesor Nshuti Manase, consejero económico en la presidencia y presidente de Cristal Venture (antiguamente Tri-Star Investments, rama económica del FPR), Karegeya es acusado de haber ayudado a Félicien Kabuga, uno de los sospechosos de genocidio que sigue fugado, a escapar de la justicia. Esta acusación es lanzada de nuevo seis meses más tarde por la fiscalía general. Seguirán numerosos ataques, unos más perversos que otros, que sería un tanto fastidioso enumerarlos.

El 15 de noviembre de 2010, Kayumba Nyamwasa, Rudashingwa, Gahima y Karegeya son convocados ante el alto tribunal donde deben responder de graves acusaciones: atentado a la seguridad del Estado, amenazas a la autoridad del Estado, divisionismo étnico, difamación y formación de un grupo terrorista. A la vez que indican que esperan una condena en rebeldía, rechazan “categóricamente” esas acusaciones « *as false and malicious, the latest in the regime’s campaign of terror, denial, deception, and attempts at tarnishing the image of those who dare speak the truth about the situation in Rwanda and the authoritarian character of the regime* ». Igual que en el caso de Ingabire (cf. *supra*), tres días antes del procesamiento, un ‘desertor’ de las FDLR viene a afirmar oportunamente que los cuatro acusados “mantienen contactos constantes y reuniones a alto nivel con los dirigentes de las FDLR”. El 14 de enero de 2011, Kayumba Nyamwasa y Rudashingwa son condenados a 24 años de cárcel, mientras Karegeya y Gahima lo son a 20 años. El portavoz del ejército indica que “la cosa no ha terminado” y que existen otras investigaciones por terrorismo en curso, en referencia a los atentados con granadas de 2009-2010. Ruanda dirige mandatos de detención y solicitudes de extradición a Interpol.

Entre tanto, los cuatro disidentes están entre los iniciadores de un nuevo movimiento político, Rwanda Nacional Congreso, creado el 12 de diciembre de 2010 en Bethesda en los EEUU. Tras haber denunciado las fechorías del régimen establecido, los fundadores dicen planear “un Ruanda nuevo que será una nación unida, democrática y próspera, habitado por ciudadanos libres en comunidades armoniosas y seguras, que vivirán juntas en paz en la dignidad y respeto mutuo, sin consideración de clase social, etnicidad, lengua, región, origen o cualquier otra diferencia, en una democracia regida por los principios universales de los derechos humanos y del estado de derecho”. Kagame reacciona por medio de una violenta diatriba calificando « a esas gentes y sus apoyos extranjeros” de “golfos”, y afirma “sentir ya en las manos un hormigueo ante la idea de enfrentarse militarmente con los enemigos de Ruanda”.

La abierta disidencia de antiguos oficiales y altos cuadros tutsi abre la vía a alianzas orientadas a combatir el régimen de Kagame. Igual que en el pasado, esas alianzas se tejen en el este de la RDC, donde el Estado sigue siendo débil. Así, grupos armados tutsi, como el ala Nkunda del CNDP

(Consejo Nacional para la Defensa del Pueblo) y las FRF (Fuerzas Republicanas Federalistas), que han roto con Kigali, parece que se acercan al grupo de Kayumba Nyamwasa. Una alianza de conveniencia, soldada únicamente por la voluntad de enfrentarse a Kagame, parece incluso implicar a elementos de las FDLR, las FPLC (Fuerzas Patrióticas para la Liberación del Congo) y algunos grupos maï maï. Estos acercamientos son confirmados por un informe del grupo de expertos de la ONU que establece la existencia de contactos entre Kayumba Nyamwasa y Karegeya y elementos del CNDP, añadiendo que “es posible que Kayumba haya enviado en febrero un emisario a conversar en territorio congoleño con jefes de las FDLR, de las FPLC y grupos maï maï”. Por su parte, el antiguo consejero de Kagame y riquísimo hombre de negocios tutsi Tribert Rujugiro, que también ha roto con el régimen de Kigali, es acusado por un desertor de las FDLR (el coronel Bisengimana, (cf. *supra*) de financiar la coalición cuyo objetivo sería derribar a Kagame. Rujugiro desmiente, pero el 13 de abril de 2011, la policía ruandesa intercepta y embarga ocho vehículos comprados en Kigali por la Congo Tobacco Company basada en Goma y propiedad de Rujugiro. Estos vehículos estarían estinados “a dar un apoyo logístico a las actividades militares que realizan los fugitivos Kayumba/Karegeya y sus aliados que operan en el este del Congo”. La lógica de “el enemigo de mi enemigo es mi amigo” gana terreno y Uganda apoya, al menos pasivamente, a las fuerzas opuestas al régimen de Kigali, abriendo de nuevo el contencioso ruando-ugandés, cerrado provisionalmente en la primera mitad de los años 2000.

La separación, la marcha al exilio, la detención y la condena, incluso el asesinato de tutsi, confirman que la pertenencia étnica no constituye la línea divisoria más importante, sino que lo que está en juego es el control del poder. Se puede observar una sorprendente continuidad con el precedente régimen, que no dudó en eliminatr a hutu considerados una amenaza, concretamente durante el genocidio de 1994, parto igualmente antes.

3. EL INFORME MAPPING RDC

No hago aquí un análisis de este informe de las Naciones Unidas sobre las graves violaciones de los derechos humanos cometidas en RDC entre 1993 y 2003. Estudio únicamente el impacto de este informe en Ruanda y la manera como el régimen ruandés, acusado gravemente por esta investigación, ha reaccionado. La filtración del proyecto de informe en *Le Monde* (cf. *infra*) no ha sido la causa, sino más bien la consecuencia de la actitud de Kigali. Lo mismo que el resto de países encausados en el informe, Ruanda había recibido el proyecto en junio de 2010. En una carta dirigida el 5 de agosto al secretario general de la ONU, la ministra ruandesa de Asuntos Exteriores, Louise Mushikiwabo, afirma que el documento « *is not only fatally flawed but an embarrassment to the United Nations* ». Son denunciados “los errores y omisiones” y el hecho de que el equipo de investigación “se haya fiado del

trabajo de algunas ONG” y “el nivel muy reducido de pruebas”; en cuanto a la conclusión de la carta, es especialmente amenazadora: « *attempts to take action on this report – either through its release or leaks to the media – will force us to withdraw from Rwanda’s various commitments to the United Nations, especially in the area of peacekeeping* ». La referencia es clara: la misión mixta ONU-UA en Darfur sería muy difícil sin los 3.500 militares ruandeses.

Sin duda, la filtración se organiza por el temor de algunos de que el chantaje funcione y de que el informe o bien no sea publicado o sea edulcorado. Le Monde publica en su edición del 27 de agosto de 2010 amplios extractos del proyecto de informe. De entre los actores imputados, Ruanda lo es el más gravemente afectado, tanto más cuanto que el régimen se ve a su vez sospechado de haber cometido genocidio: “los ataques sistemáticos y generalizados (contra los hutu refugiados en RDC) ponen de relieve varios elementos abrumadores que, si son probados ante un tribunal competente, podrían ser calificados de genocidio”. La reacción de Kigali es fulminante. Con su estilo habitual, el gobierno califica el texto de « *malicious, offensive and ridiculous* ». “El informe es un documento peligroso e irresponsable que, bajo el ropaje de los derechos del hombre, no puede sino provocar la inestabilidad en la región de los grandes lagos y minar los esfuerzos en marcha para estabilizar la región”. Como siempre, la culpa es de los demás: “Es inmoral e inaceptable que las Naciones Unidas, una organización que ha fracasado en la prevención del genocidio en Ruanda y de la crisis de refugiados subsiguiente (...) acuse hoy al ejército que ha detenido el genocidio de cometer atrocidades en RDC”. Haciéndose eco de su carta del 5 de agosto, la ministra Mushikiwabo anuncia que las tropas ruandesas en el seno de las misiones de la ONU están listas para ser retiradas caso de que el informe sea publicado. Frente al chantaje ruandés, el secretario general Ban Ki-moon incluso debe viajar a Ruanda, donde trata de salvar tanto el informe de la ONU como el contingente ruandés en Darfur, garantizando que los Estados concernidos tendrán la ocasión de formular sus observaciones antes de la publicación oficial. Según fuentes de la ONU, Ruanda acepta en no retirar sus tropas en caso de que se publique el informe; la ONU, en contrapartida, no enviará inmediatamente el informe cara a un seguimiento judicial.

El régimen inicia luego una campaña de denigración del informe a fin de evitar que sea publicado oficialmente. Va muy lejos, hasta el punto de hacer decir a víctimas de masacres cometidas por el APR que el informe es una sarta de mentiras. Cuatro mujeres parlamentarias hutu que vivieron en los campos de refugiados son empujadas de este modo a declarar que « ningún civil hutu fue matado por el APR » en Kibumba y Mugunga, donde sin embargo las masacres son conocidas por todos y bien documentadas: “No hay civiles matados por el APR. Se trata de fabricaciones que tratan de manipular. Veán, yo soy hutu, esposa de un oficial exFAR, ¿por qué no me mataron cuando tenían la ocasión de hacerlo?” Lo que se hizo decir a esas pobres mujeres bajo presión pone de relieve la violencia estructural tan presente en Ruanda. El general Rwarakabije, antiguo de las FAR y de las FDLR reintegrado en el ejército ruandés, afirma

contra toda evidencia que “lo que dicen en el informe no es lo que yo he visto”. Entre tanto, igual que hizo en el pasado para combatir la competencia universal en países terceros, Ruanda trata de ganarse el apoyo de la Unión Africana. La víspera de su publicación, el gobierno recuerda que este informe “falsificado y peligroso” podría amenazar la estabilidad regional.

El informe sale el 1 de octubre. Aunque algunas constataciones estén formuladas de manera menos taxativa, el proyecto conocido desde la filtración es mantenido ampliamente, incluyendo la referencia a la posibilidad de haberse cometido genocidio. Esta calificación ha dominado ampliamente el debate. No obstante, tal y como lo ha señalado el director ejecutivo de Human Rights Watch, “las cuestiones de calificación y de terminología son importantes, pero no deberían eclipsar la necesidad de actuar sobre el contenido del informe, sea cual sea la manera como se califiquen los crímenes. Cuando menos, las tropas ruandesas y sus aliados congoleños han cometido crímenes de guerra y contra la humanidad a escala masiva y gran número de civiles han sido asesinados con total impunidad”.

La reacción de Kigali es previsible. El informe es « *flawed and disregards the facts* », se trata de « *manipulation, contradiction, omissions and overall flawed methodology* », es « *a blueprint for revisionism* », « *a desperate plan to assassinate the truth and run away from responsibility* », etc. Por otra parte, no obstante, medios influyentes de la comunidad internacional toman el informe en serio. *The New York Times* compara los crímenes cometidos por el APR en el Congo a los que cometió en 1994 en Ruanda, pero que fueron cubiertos por la complicidad del silencio. *The Guardian* escribe que “por sus intentos de impedir la publicación del informe, el gobierno ruandés plantea la cuestión de saber qué es lo que quiere ocultar. Las fuerzas de Kagame jugaron un papel crucial en el fin del genocidio de 1994 en Ruanda, pero ello no las absuelve de los crímenes que habrían cometido en los años posteriores, tanto en Ruanda como en el Congo”. Ban Ki-moon declara que “los autores de crímenes y sus dirigentes deben ser detenidos e inculcados de crímenes contra la humanidad ante tribunales nacionales o internacionales”. A esta posición se une el gran aliado de Ruanda. Philip Crowley, secretario de Estado adjunto, afirma que los EEUU « *strongly supports accountability for violations of human rights and international humanitarian law around the world, including in the DRC* », posición reiterada por el embajador Americano itinerante encargado de crímenes de guerra Stephen Rapp de visita en Kinshasa, que indica que su país apoya la idea de la puesta en funcionamiento de una sala mixta de justicia para juzgar los crímenes cometidos en el Congo.

Aunque si bien en un primer momentos el informe Mapping parece desaparecer en los cajones de los despachos, tras unos meses, la pista de los tribunales mixtos del Congo se precisa. A pesar de haber formulado algunas críticas, la reacción del gobierno congoleño al informe ha sido globalmente constructiva y la presión de la sociedad civil garantiza el seguimiento de la cuestión. En abril de 2011, el director de los procedimientos especiales en el Alto Comisariado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Bacre

Ndyaye, anuncia que el gobierno congoleño desea establecer salas especiales para juzgar los crímenes mencionados en el informe de la ONU. Reunidos del 6 al 8 de abril de 2011 en Goma, altos funcionarios y representantes de la sociedad civil congoleña e internacional, estudian un proyecto de ley del gobierno cuyo objetivo es establecer una jurisdicción especial mixta, en presencia concretamente del ministro congoleño de Justicia y de Derechos Humanos y del embajador Stephen Rapp. Si esta jurisdicción se pusiera en pie, colocaría a Ruanda ante un verdadero dilema: o renunciar al beneficio de un largo periodo de impunidad o rechazar el traslado de sus sospechosos ante el tribunal mixto y correr el peligro provocar la indignación de la comunidad internacional de donantes.

4. LA GOBERNANZA DÍA A DÍA

El mundo descubre cada día más la doble cara de Ruanda. Por un lado, una gobernanza burocrática-tecnocrática de las mejores de África. La visión de las elites es cosmopolita y francamente modernista, actitud que explica cierto número de éxitos, concretamente en el terreno de la salud, de la lucha contra la corrupción y de la creación de un entorno propicio para las empresas y negocios. Las ambiciones están bien presentadas en el documento *Rwanda Vision 2020*, publicado en 2003. Un reciente estudio sugiere que Ruanda constituye un ejemplo de (neo)patrimonialismo de desarrollo, en el que una elite en el poder es capaz de imponer una gestión centralizada de las rentas y de utilizar éstas en el largo plazo. Kagame siguen encadenando honores durante sus frecuentes desplazamientos por el mundo, sobre todo en EEUU. En junio de 2010, es nombrado por Ban Ki-moon copresidente con el primer ministro español Zapatero de un grupo internacional encargado de promover los OMD.

Un mes más tarde, este nombramiento se convierte igualmente en ocasión para descubrir el otro lado del rostro de Janus. Cuando la iniciativa sobre los OMD es lanzada en Madrid, Zapatero rehúsa encontrarse con Kagame, después de que varias ONG y grupos parlamentarios criticaran la visita “de un presunto genocida”. El incidente es revelador de los sentimientos contradictorios suscitados por el régimen de Kigali: por un lado, el honor de co-presidir un grupo internacional prestigioso; y por otro, la afrenta pública hecha por el otro co-presidente. Esta ambigüedad ha asomado cada vez más a la superficie, como demuestran los títulos aparecidos en la prensa. Esta doble cara corresponde en realidad al foso que separa la gobernanza burocrática de la gobernanza política.

Algunas prácticas empañan la imagen internacional del régimen. Informaciones cada vez más precisas evocan la actividad de agentes ruandeses en el extranjero, donde amenazan a personas consideradas opositoras. En el Reino Unido, el establecimiento de escuadrones de matones que actuarían por cuenta del régimen de Kigali es ya evocado a mediados de 2010; en enero de 2011, el periódico *Umuwugizi* (exiliado en Kampala) publica detalles sobre estas operaciones. Las cosas se precisan en abril-mayo de 2011, cuando los

mismos servicios secretos británicos hacen sonar la alarma. A finales de abril de 2011, MI5 advierte al embajador ruandés en Londres de que debe cesar una campaña de intimidación de supuestos opositores en el Reino Unido. Parece que la lección no es escuchada y las amenazas adoptan formas más radicales. El 12 de mayo, Scotland Yard advierte formalmente a dos británicos de origen ruandés: « *Reliable intelligence states that the Rwandan Government poses an imminent threat to your life. The threat could come in any form. (...) Conventional and unconventional means may be used* », y la prensa toma cartas en el asunto. Evidentemente, el gobierno ruandés niega todo, pero los precedentes (concretamente los asesinatos de Lizinde y Sendashonga y la tentativa contra Kayumba Nyamwasa) son inquietantes. El régimen llega incluso a justificar la eliminación de disidentes. En una tribuna libre publicada en *The New Times* el 4 de mayo de 2011, bajo el título « *Osama bin Laden's lesson for local terrorists* », el autor escribe que « *in Rwanda we have our own criminals and terrorists sheltering in foreign countries. What has happened to Osama bin Laden should serve as notice to them that they cannot hide for ever. Justice, in whatever form, will catch up with them* ». El artículo da luego una lista de opositores que « *will soon find out that the jungles of foreign countries and villas in upmarket areas of foreign capitals are not very safe. They can run and hide, but will run out of options and their actions will catch up with them* ». No se podría ser más claro.

El régimen prosigue cuidando sus relaciones, pagando allá donde es necesario. Uno de los periodistas ugandeses más conocidos, Andrew Mwenda, sorprende desde hace varios años por la manera con que incienza a Kagame. La cosa se hace comprensible cuando se publica en una web una factura de 200.000 dólares que Mwenda dirige al ministro ruandés de finanzas en concepto de “publicidad”. El pago es efectuado de manera “confidencial” a partir de una cuenta secreta (“classified account”). A finales de 2010, el régimen inicia una operación de seducción con el objetivo de reclutar a hutu en la diáspora. La senadora FPR Aloysia Incumba, acompañada de un ramillete de hutu, visita Bruselas a primeros de noviembre, seguida por Kagame un mes más tarde. En el marco del programa de repatriación “*Ngwino Urebe*” (“Venid a ver”), son organizadas visitas a Ruanda en diciembre de 2010 en las que participan sospechosos de genocidio e incluso el antiguo secretario general de los *interahamwe* del MRND. Los supervivientes se sienten profundamente heridos y la ironía reside en que dos de esos visitantes son detenidos en Bruselas unos meses después a causa de sus presuntas responsabilidades en el genocidio. La cínica hipocresía es llevada al límite cuando *The New Times*, al relatar las detenciones, no dice que los dos sospechosos estaban en Ruanda en diciembre y que el fiscal Martin Ngoga afirma que “hemos trabajado con los investigadores belgas en este asunto. Así que, las detenciones son para nosotros ninguna sorpresa”, cuando él podría haberlos detenido en Kigali, invitados y tratados a cuerpo de rey.

Entre tanto, Kagame sigue tratando con desprecio cualquier tipo de crítica, a la que replica, pretendiendo hablar en su nombre, que corresponde a los

ruandeses determinar su futuro. Del mismo modo que el año anterior, el régimen queda sorprendido al encontrarse bastante mal situado (el 31 entre 53 países de África) en el *Mo Ibrahim Index on Good Governance* para 2010. El índice es calificado de « *far from the truth, biased and misleading* ». Ruanda, una vez más, víctima de una conspiración ya que “quien ha cumplimentado esos datos tiene un plan para minar o manchar deliberadamente la imagen del país”. Un libro (STRAUS, S., WALDORF, L. (eds.), *Remaking Rwanda. State Building and Human Rights after Mass Violence*, Madison WI, The University of Wisconsin Press, 2011) que contiene análisis de prácticamente todos los expertos de Ruanda se convierte en objeto de ataques virulentos incluso antes de su aparición. La finalidad de los autores calificados como « *a self-serving and self-advertising lot* », « es la de rebajar cuatro veces el gobierno ruandés », y el libro es “tergiversador” y constituye una “distorsión deliberada”.

Las prácticas políticas hacen disminuir a veces la eficacia de las medidas técnicas y suscitan resistencias. Así, cuando el gobierno decreta que los tejados de paja deben desaparecer, la medida es puesta en aplicación de manera voluntarista, autoritaria y rápida. Las autoridades provinciales y locales compiten entre ellas en celo para ser las primeras en haber erradicado los “Nyakatsi” y la operación va de la mano de graves atentados contra los derechos humanos. Las viejas casas son destruidas o quemadas y decenas de miles de familias se encuentran sin casa, al raso. De la misma manera tan radical e imprevista, el ministro de Salud anuncia a primeros de febrero de 2011 que en tres años más o menos 700.000 hombres serán vasectomizados a fin de limitar el crecimiento demográfico. La organización americana Population Research Institute (PRI) se opone con fuerza a esta medida que considera coercitiva, concretamente por el gobierno ha fijado una cuota en cifras. El PRI recuerda que es ilegal utilizar fondos públicos americanos para abortos y esterilizaciones forzadas. El ministerio de Salud reacciona inmediatamente: se trata de “un malentendido” y el objetivo de 700.000 vasectomías no existe, ya que “sería tan sintético como una violación de los derechos humanos fijar objetivos para opciones de este género en materia de *planning familiar*”. Este tipo de medidas genera igualmente resistencias en otras partes, pero podrían ser especialmente delicadas en Ruanda si se diera la impresión de que el objetivo son los hutu y no los tutsi. En general, medidas impuestas a gran velocidad no siempre tiene los efectos esperados. Así es como infraestructuras – mercados, estaciones de autobuses, fábricas – realizadas sin la mínima concertación permanecen desiertas e inexploradas. Un estudio publicado en septiembre de 2010 por el Instituto de Investigación y Diálogo por la Paz (IRDPA) muestra que el 74% de los ruandeses afirma que no participa nunca en la puesta en marcha de las políticas y de los programas públicos.

Sin embargo, es en un ámbito más fundamental donde la mala gobernanza política corre el peligro de destruir las adquisiciones de la buena gobernanza burocrática. Strauss y Waldorf recuerdan que los cuatro factores considerados por James Scott como generadores de « los episodios más trágicos de la ingeniería social iniciada por el Estado », están presentes en

Ruanda: Una planificación administrativa de la naturaleza y de la sociedad, una ideología muy modernista que cree en la reestructuración racional de la naturaleza humana y de las relaciones sociales, un Estado autoritario presto y capaz de utilizar plenamente su poder coercitivo a fin de realizar esos designios modernistas, y una sociedad civil sometida que no posee la capacidad de resistir a esos proyectos”. Esto resume el dilema al que Ruanda se confronta ante el mundo. Efectivamente, por un lado, por su autoritarismo, por la exclusión, por la violación de los derechos humanos, por la falta de respeto de la mayoría de los ciudadanos, el régimen crea una situación que desembocará en una nueva explosión de violencia. Por otro lado, el régimen parece ganar la apuesta de la modernización y del ‘desarrollo’ y es este éxito el que ven los donantes de fondos y los inversores.

5. LA JUSTICIA

La justicia sigue siendo utilizada con fines políticos. Los asuntos Mushayidi, Ingabire y Ntaganda ya han sido mencionados anteriormente, pero también hay personas anónimas que están pagando el pato. Numerosos ciudadanos ordinarios están afectados por denuncias y persecución judicial en virtud de leyes muy vagas sobre el divisionismo y la “ideología del genocidio”. Según datos de Amnistía Internacional, más de 1.800 personas fueron perseguidas judicialmente por “ideología del genocidio” en 2007, 2008 y 2009. El informe señala que la imprecisión de estas leyes es utilizada de manera deliberada para criminalizar la crítica del gobierno y la disensión legítima, pero que también permite arreglos de cuentas individuales.

Otras leyes, como la prevención de atentado contra el Estado, son utilizadas igualmente para reprimir la crítica. La orden de mantenimiento de detención preventiva de un sacerdote de Rwamagana “constata que el sacerdote (...) confiesa judicialmente y públicamente que ha criticado la manera como se ha ejecutado el programa de lucha contra las casas cubiertas de paja. (...) Ha reconocido haber dicho a los cristianos que la toma de medicamentos para limitar los nacimientos tiene malas consecuencias para la vida de las mujeres. (...) Todo ello puede hacer que la población se rebele y la incite a la desobediencia, hasta llegar a un levantamiento que puede comprometer la seguridad del país. El tribunal opina que se trata de serios índicos de culpabilidad”. Es evidente que el sacerdote no ha hecho más que criticar las políticas gubernamentales y en el segundo caso expresar el punto de vista de la Iglesia católica.

A finales de septiembre de 2010, unavez más se retrasa la clausura de las jurisdicciones gacaca. A finales de febrero de 2011, cuando el procesos siguen sin terminarse, el ministro de justicia anuncia que han sido juzgadas 1.222.093, 145.255 de las cuales han sido absueltas (12 %). En consecuencia han sido declarados culpables más de un millón de personas, algo que corresponde con las cifra anunciada por el gobierno desde hace una decena de años. El número de condenados da que pensar por dos razones: en primer lugar

porque el número de autores es de lejos superior al número de víctimas; luego, porque el número de condenados representa casi el 70% de los varones hutu mayores de edad en 1994, lo que viene a decir que la totalidad de los hutu son considerados en su globalidad culpables de genocidio.

La evaluación de la experiencia *gacaca* está por hacerse y sin duda no habrá unanimidad. El juicio de Timothy Longman es severo: “Lejos de haber resuelto los conflictos y de haber promovido la reconciliación, como lo pretendieron sus promotores, los procesos han permitido a un gobierno autoritario consolidar su poder, han creado la inseguridad en la población y han aumentado las divisiones étnicas. (...) Los procedimientos *gacaca* no han promovido los principios judiciales restauradores o tradicionales. Antes al contrario, los *gacaca* han sido un procedimiento punitivo para promover una agenda política represiva y para saldar cuentas y numerosas vendettas personales”. Otros investigadores proponen una evaluación más positiva. Clark constata que los *gacaca* han producido resultados muy variables y que algunos objetivos han sido alcanzados mejor que otros. Piensa igualmente que han creado un espacio para el debate, sobre todo en las periferias donde el control ejercido por el FPR estaría relativamente reducido.

El mandato del TPIR es prorrogado de nuevo por el Consejo de Seguridad, esta vez hasta el 31 de diciembre de 2012 (recordemos que los procesos deberían haber terminado a finales de 2008 en primera instancia). Al mismo tiempo, el Consejo pone en pie un mecanismo internacional residual que debe completar las funciones que queden del TPIR y del TPIY. La incertidumbre en cuanto a la duración de sus contratos incita a numerosos colaboradores a buscar empleo en otros sitios, haciendo así más difícil la realización de la estrategia de fin de mandato. Una de estas estrategias está en el intento del fiscal de transferir los asuntos a Ruanda. En junio de 2010, el fiscal remite a Kigali 25 dossier de investigación, del mismo modo a como en años precedentes lo había hecho con otros 35. Sin embargo, no se trata más que de sospechosos que no se sabe dónde están y que no han sido inculpados. La medida es por lo tanto esencialmente simbólica. Por el contrario, una sala del TPIR debe autorizar el traslado de personas inculpadas, algo que en el pasado había sido sistemáticamente rechazado. El fiscal hace un último intento con relación a tres inculpados en noviembre de 2010, arguyendo que las condiciones de unos procesos equitativos en Ruanda ya están reunidas. Sin embargo, la inquietud respecto a los procedimientos de traslado no ha desaparecido y es poco probable que estas demandas sean aceptadas.

En el periodo que cubre esta crónica, han sido juzgados nueve detenidos, cuatro de ellos en el proceso conjunto “Militares II”; han sido condenados todos. Un detenido espera su procesamiento, mientras que los procesos en curso afectan a 16 detenidos (a 12 de ellos en procesos conjuntos). Debo hablar brevemente de uno de los asuntos más importantes cerrado en primera instancia que corresponde a cuatro oficiales. El 17 de mayo de 2011, el exjefe de estado-mayor de las FAR es condenado a 30 años de cárcel, mientras otros dos oficiales cargan con la pena de 20 años. El antiguo jefe de estado-

mayor de la gendarmería, Augustin Nindiliyimana es condenado a una pena que corresponde al periodo pasado entre rejas desde su detención en Bélgica el 29 de enero de 2000. Es considerado inocente respecto a cierto número de hechos y cuando se retiene su culpabilidad, la fórmula utilizada es siempre la misma o similar: Nindiliyimana debería haber estado al corriente de la implicación de gendarmes que estaban bajo sus órdenes en crímenes; nada demuestra que hubiera adoptado medidas para castigarlos; en cuanto superior de ellos carga con la responsabilidad por el protagonismo de esos gendarmes en los crímenes. En su conclusión, la sala señala no obstante “el control limitado de Nindiliyimana sobre la gendarmería tras el 6 de abril de 1994, su apoyo constante de los acuerdos de Arusha y de una solución pacífica del conflicto (...) y su oposición a las masacres”. Ante tales circunstancias, es difícil deshacerse de la impresión de que en realidad la sala quiere absolver sin decirlo, utilizando la vía de la condena a una pena que corresponde a la duración de la detención preventiva. De cualquier modo, resulta difícil creer que la pena de 11 años, tres meses y 17 días corresponda exactamente a la gravedad de los hechos por los que Nindiliyimana es declarado culpable.

La instrucción francesa sobre el atentado del 6 de abril de 1994 contra el avión del presidente Habyarimana sigue adelante no sin incidentes e incluso manipulaciones. Cabe recordar que un testigo importante, Joshua Abdul Ruzibiza, que había señalado al FPR como autor del atentado, se había retractado en noviembre de 2008. El régimen ruandés se había alegrado demasiado pronto pensando que ello significaba la muerte de la instrucción y se plantearon preguntas sobre este súbito cambio de Ruzibiza. Oído por los jueces de instrucción Marc Trévidic y Natalie Poux en Noruega el 15 de junio de 2010 en el marco de una comisión rogatoria, explica que su retractación “está ligada a mi seguridad personal y a la de ciertos testigos” y confirma las grandes líneas de sus ulteriores y abrumadoras acusaciones contra el FPR. Ruzibiza muere por enfermedad a finales de septiembre, pero sus declaraciones de junio son objeto de una filtración a la prensa. El gobierno ruandés grita que existe una “conspiración” y sospecha que la justicia francesa hace un montaje contra Ruanda. El juez Trévidic se desplaza a Ruanda en septiembre 2010 y son efectuados peritajes, concretamente en balística. A mediados de diciembre, seis oficiales ruandeses son cuestionados (esto es, inculcados) por “complicidad de asesinatos en relación con una empresa terrorista”, lo que ya antes había sido el caso para Rose Kabuye desde su detención en 2008. En cuanto a Faustin Kayumba Nyamwasa, sigue siendo objeto de un mandato de arresto internacional. Ya hemos visto que se encuentra en Sudáfrica, desde donde sería más fácilmente extraditable. Por otra parte, en el marco del procedimiento ante la *Audiencia Nacional*, el gobierno español solicita su extradición el 17 de septiembre de 2010. La instrucción francesa no está terminada en el momento en que escribo estas líneas, pero se acerca el momento de la verdad. Si el asunto fuera trasladado para inicio de persecución judicial ante el tribunal de lo criminal, ello tendría, sin lugar a dudas, consecuencias en las relaciones, ya deterioradas últimamente, franco-ruandesas.

6. CONCLUSIÓN

El periodo que hemos pasado en revista no ha sido bueno para el régimen ruandés. Los tres episodios analizados aquí – el proceso electoral, las disidencias en el seno del FRP y el informe de la ONU – han exacerbado las incertidumbres e inquietudes de la comunidad internacional ante un régimen capaz de lo mejor y de lo peor, combinado una decente gobernanza tecnocrática-burocrática con una desastrosa gobernanza política.

La segunda corre el peligro a largo plazo de destruir las adquisiciones de la primera. Las amenazas son numerosas e importantes. Son, en primer lugar, de carácter judicial: las consecuencias que podríana derivarse del informe de la ONU, los procedimientos judiciales en Francia y en España, el proceso que debe abrirse en Sudáfrica sobre el atentado contra Kayumba Nyamwasa; todos estos asuntos poseen un real potencial de desestabilización del régimen y podríana tener un impacto en las relaciones internacionales. Las amenazas son políticas, igualmente. Aunque ya antiguas, las prácticas criminales del poder en el interior y en el exterior del país se han hecho más visibles y, sobre todo, atraen la atención y desaprobación de la parte de los aliados que parecían seguros, especialmente de los EEUU y del Reino Unido.

Por fin, es preciso atraer la atención sobre los peligros de las repercusiones regionales. Una vez más, parece que se están tejiendo alianzas de conveniencia sobre la lógica de “el enemigo de mi enemigo es mi amigo”. Si se estableciera un frente anti-Kagame, no concerniría en primer lugar o en un primer momento al interior de Ruanda, sino más bien al este de la RDC, donde el Estado tiene dificultades para reconstruirse; concerniría incluso a Uganda. En estos quince años últimos, dos guerras continentales devastadoras han partido de Ruanda, y sería irresponsable no seguir de cerca y combatir tal perspectiva.

Amberes, mayo de 2011

* Esta Crónica forma parte de “*L’Afrique des Grands Lacs, Annuaire 2010-2011* », Éditions L’Harmattan. El autor, Filip Reyntjens, es Profesor del Instituto de Política y Gestión del Desarrollo de la Universidad de Amberes (Bélgica), a la vez que coordinador/director del Anuario. En la versión al castellano, que ha recibido el visto bueno del autor, se ha optado, en aras de una lectura más cómoda, por suprimir las abundantes notas a pie de página que aparecen en el original.